

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, septiembre 23 de dos mil veinte (2020)

Radicado: 05001- 31- 05-**009-2016-01035-01**  
Demandante: ALBEIRO ANTONIO MÚNERA QUINTERO  
Demandado: COLPENSIONES  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA  
Tema: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral promovido por ALBEIRO ANTONIO MÚNERA QUINTERO en contra de COLPENSIONES.

Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

En atención a la sustitución de poder presentada por el representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones, se reconoce personería adjetiva a la abogada Ana María Núñez Ochoa, integrante de la sociedad Muñoz Medina Abogados SAS, sustitución que se efectúa en los términos del artículo 75 del C.G.P.

En atención al poder otorgado por Colpensiones a la firma de abogados Abaco – Abogados y Consultores, se reconoce personería adjetiva a la abogada Eliana Yaneth Gallego Sánchez, quien queda investida con las facultades otorgadas por el mandatario para la defensa de la parte demandada.

## **ANTECEDENTES**

LA *A quo*, tras hallar satisfechos los requisitos de causación de la pensión especial de vejez en los términos del Decreto 2090 de 2003 declaró que el actor es beneficiario de tal derecho. Sin embargo, dejó en suspenso su disfrute hasta tanto se demuestre la desafiliación del sistema, sin que hubiere lugar al pago de intereses de mora ni indexación.

Inconforme con la decisión fue recurrida así:

La parte demandante disiente respecto a la fecha de reconocimiento de la pensión y la densidad de cotización que el acto acumula. Expresó que la pensión especial que consagra el Decreto 2090 de 2003 permite el reconocimiento pensional de forma anticipada, recompensado la mayor cotización con la disminución en la edad de disfrute, por lo que para esta no es exigible la desafiliación del sistema.

Respecto a la densidad de cotización acumulada refiere que es superior a la consignada en la historia laboral, toda vez que conforme a los certificados laborales y la prueba testimonial, el demandante prestó sus servicios por espacio superior a 28 años, esto es más de 1498 semanas de cotización.

Considera que el *A quo* interpreta de forma errónea la norma respecto a la densidad de cotización mínima para causar la pensión de vejez, pues a su juicio la posibilidad de disminuir la edad pensional es a partir de las 700 semanas cotizadas, no 1300 y por ello es posible que al actor se le reconozca la prestación desde que cumplió los 50 años de edad. En adición insiste en la procedencia de los intereses de mora.

La parte demandada refirió que no hay lugar al reconocimiento pensional, ya que no se satisface la densidad de cotización, aunado a que las situaciones de mora patronal no son atribuibles a la administradora de pensiones y por tanto le corresponde al empleador asumir la prestación, así como el pago del cálculo actuarial respecto al tiempo en que no existió afiliación, quedando Colpensiones relevada de la obligación pensional.

### **ALEGATOS**

Dentro del término de traslado que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la activa reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación, indicando que hay lugar al reconocimiento anticipado de la pensión especial de vejez, con el pago del retroactivo pensional desde que el actor arribó a los 50 años de edad.

### **CONSIDERACIONES**

Previo a adentrarnos en el estudio de los temas propuestos, encuentra la Sala pertinente expresar que, se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que Albeiro Antonio Múnera Quintero nació el 1 de agosto de 1961 (así se expresa en la historia laboral fl. 61 y se reconoce en la resolución GNR 337734 de 2015 fl. 10/12), **2)** Que laboró para Industrial Hullera entre el 6 de febrero de 1989 al 1 de junio de 1998, desempeñando actividades de minería dentro de socavones (así se reconoce en la conciliación realizada entre el actor, la empresa Industrial Hullera SA en liquidación obligatoria y Cementos Argos SA el 20 de diciembre de 2007 fls. 15/21); **3)** Que desde el 24 de mayo de 2007 labora para la empresa Carbones San Fernando en oficios varios minería subterránea, así se certificó el 29 de mayo de 2015 (fl. 14) y **4)** que el 24 de julio de 2015 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión especial de vejez, misma que fue negada al considerar que no se satisfacían los presupuestos mínimos de la prestación (fls.10/13)

Atendiendo los aspectos objeto de apelación, y dentro del grado de consulta, corresponde a esta corporación determinar: **1)** Densidad de cotización acumulada por el demandante; **2)** Procedencia de la pensión especial de vejez por exposición a

actividades de alto riesgo, previo análisis de las normas que consagra tal régimen; **3)** Disfrute de la prestación y **4)** Procedencia de los intereses de mora.

Pues bien, no se cuestiona la existencia de la relación laboral del actor con la empresa Industrial Hullera, con inicio el 6 de febrero de 1989 hasta el 1 de junio de 1998 con el ejercicio de labores en socavón de mina en el municipio de Amagá – Antioquia, (fls. 15/21) empleador que si bien realizó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones se observa que existen algunos periodos con cotizaciones en mora, aunado en que no se efectuaron los aportes especiales en razón a la actividad de alto riesgo.

Sin embargo, dada la conciliación realizada con el liquidador de industrial Hullera y Cementos Argos SA, estos se obligaron al pago de los aportes a la seguridad social en pensiones y en ALTO RIESGO durante todo el tiempo que tuvo vigencia la relación con el actor (06/02/1989 al 31/05/1998), entidad que además asumió las cotizaciones en mora por la entidad Mineros Unidos SA, causados durante el tiempo que tuvo vigencia tal relación laboral que culminó el 30 de octubre de 2007 (fls. 15/21)

Se observa así que, pese a que se omitieron algunas contribuciones al sistema pensional, se tiene claro la existencia de las relaciones laborales sostenidas con Industrial Hullera entre el 06/02/1989 y el 31/05/1998, entre el 01/08/1998 y el 01/09/1999 con el empleador Libardo Román, con Mineros Unidos entre 01/02/2000 y el 30/10/2007, y con Carbones San Fernando entre el 24/05/2007 y hasta el 30/06/2017 (teniendo en cuenta que esta fecha señala la historia laboral del folio 84), se acumula un total de 1474 semanas al 30 de junio de 2017 de las cuales por lo menos 1.416 semanas fueron servidas en actividades de alto riesgo, esto se desprende de las cotizaciones especiales cotizadas por el empleador Carbones San Fernando, las manifestaciones en la diligencia de conciliación surtida con Industrial Hullera en Liquidación y Cementos Argos, este último que asumió el pago de las cotizaciones en pensiones de los empleadores Industrial Hullera y Mineros Unidos SA y de la prueba testimonial.

Se destaca que la densidad de cotización referenciada obedece a la validación de ciclos incompletos e imputaciones de mora que efectuó la administradora de pensiones, quien no ejerció las acciones de cobro respecto a las cotizaciones deficitarias, en desmedro de los derechos del afiliado quien no ha de sufrir las consecuencias nocivas del actuar negligente de la administradora del sistema. (al respecto la sentencia SL 1040 de 2020)

Ahora bien, se destaca que los argumentos de apelación de la pasiva son ajenos a las controversias de este caso, en tanto en su apelación señaló la imposibilidad de reconocer la prestación teniendo en cuenta ciclos en los que no existía cobertura del RPM, asunto que no se presenta en este caso en tanto el inicio del vínculo laboral del actor es posterior al llamamiento a inscripción del ISS en el Municipio de Amagá - Antioquia, por lo que tal aspecto de debate es inocuo para este asunto.

En lo **referente a la pensión especial de vejez**, ha de acudirse a las previsiones del Decreto 2090 de 2003, que consagra un esquema normativo de pensiones de alto riesgo y que establece los parámetros bajo los cuales se causan las prestaciones contemplando la posibilidad de anticipar la edad pensional en razón al ejercicio continuado de labores que representan una disminución en la salud del afiliado y una mengua de sus expectativas de vida saludable, cuya vigencia se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 por el artículo 1 del Decreto 2655 de 2014.

Es así que el régimen especial de pensiones por actividades de alto riesgo, prevé la posibilidad de disminuir la edad para acceder a la prestación a menor edad como resultado de una carga contributiva superior, con lo que además de garantizar el derecho a la seguridad social en pensiones, se logra el equilibrio financiero del sistema pensional; bajo este esquema se causa la prestación por vejez cuando se cumplen los siguientes presupuestos:

**ARTÍCULO 4o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ.** La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo [36](#) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo [9o](#) de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Norma que a su vez contempla un régimen de transición, que consiste en la posibilidad de acceder a la prestación bajo algunas de las premisas del régimen anterior, así

**ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.** Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley [797](#) de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

**PARÁGRAFO.** Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo [36](#) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo [18](#) de la Ley 797 de 2003.

La norma anterior contempla dos premisas a saber: **a)** una densidad de cotización de 500 semanas especiales al 28 de julio de 2003 y **b)** acreditar al 1° de abril de 1994, 35 ó 40 años de edad par ahombres y mujeres respectivamente ó acumular más de 15 años de cotizaciones a la misma data.

Sobre el primer supuesto ha de acudirse a las precisiones de la Sentencia C - 663 de agosto 29 de 2007, bajo el entendido de que las 500 semanas especiales se refieren a aquellas cotizadas en actividades catalogadas como de alto riesgo, dado que la cotización adicional sólo fue consagrada por el Decreto 1281 de 1994.

Y sobre los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula la transición de la prestación ordinaria de vejez, se remite a las consideraciones de la sentencia CSJ SL1353-2019, que inaplica tal exigencia al considerarlo excesivo dentro de un régimen especial, así indicó:

*“Luego, para la Sala, el párrafo del artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003 no acompasa con la regulación de la pensión especial de vejez por alto riesgo y, desde esa perspectiva implica que para ser beneficiario de las prerrogativas transitorias, es necesario acreditar las exigencias del inciso primero de dicho*

*artículo, en cuanto las dispuestas en su párrafo consagran las requeridas para obtener la pensión ordinaria de vejez en el régimen general, toda vez que como se indicó, una y otra son diferentes; interpretación que en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, es más adecuada con el propósito teleológico de la normativa.*

Así pues, cumplida la condición de 500 semanas cotizadas y laboradas en una actividad catalogada como de alto riesgo, y al alcanzar la densidad de cotización de que trata el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el afiliado podrá acceder a la pensión mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, esto es el Decreto 1281 de 1994, que establece:

ARTICULO 3o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez, se sujetará a los siguientes requisitos:

Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

En síntesis, bajo el esquema explicado y de cara a las conclusiones expuestas en sentencia SL 999 de marzo 11 de 2020 que resuelve un caso de contornos similares, para aquel afiliado que habiendo cotizado por lo menos 500 semanas en condición de alto riesgo para el 28 de julio de 2003, causará la pensión especial de vejez bajo los siguientes requisitos:

- Una edad mínima de 55 años
- Densidad de cotización de que trata el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, esto es un monto que oscila entre 1000 y 1300 semanas.
- La posibilidad de disminuir un año de edad por cada grupo de 60 semanas adicionales a las primeras 1000, sin que la edad sea inferior a 50 años, requisito este último que no ofrece duda alguna, pues la norma señala de forma expresa que la posibilidad de reducción opera a partir de las 1000 semanas y no 700 como erradamente lo aduce el recurrente.

Condiciones estas que satisfizo el actor, quien el 24 de julio de 2015, fecha en que solicitó a Colpensiones la pensión especial de vejez tenía 53 años de edad, por lo que

para ese momento requería 1120 semanas de aportes (un mínimo de 1000 semanas más 120 semanas para beneficiarse de la reducción de 2 años), presupuesto que se encuentra acreditado, dado que para dicha data contaba con 1.375 semanas, quedando además satisfecha la densidad de cotización exigida por la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión allí regulada, esto es 1300 semanas para el año 2015.

Ahora, en cuanto a la fecha de disfrute de la prestación, se reitera que conforme al artículo 1º del Decreto 2090 de 2003, la pensión especial se justifica por “la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo”. Es así que no puede entenderse que la finalidad de la norma es generar un retroactivo pensional, ya que el espíritu de la norma es reducir el tiempo de permanencia en la actividad que representa un desmedro para la salud del trabajador, permitiendo que de forma prematura empiece a disfrutar de la asignación pensional, por lo que no es acertado considerar que tal propósito se cumple cuando el trabajador decide continuar ejerciendo la labor y a la vez pretende un beneficio económico del sistema. (al respecto las sentencia SL 999 de 2020)

En adición no debe perderse de vistas que para esta prestación se aplican las reglas de los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 que presenta como presupuesto del disfrute la desafiliación del sistema, el que se excepciona ante situaciones particulares como es la situación de inducción en error por parte de la administradora de pensiones al negar la prestación bajo exigencias inocuas o fallas en el cómputo de la densidad de cotización. (CSJ SL5603-2016).

Bajo estas premisas, considera la corporación que el disfrute pensional corresponde al momento en que se produjo la inducción en error, esto es el 10 de noviembre de 2015, momento en que fue notificada la resolución que negó el derecho pensional, ya que a pesar de que no hubo un retiro formal del sistema general de pensiones, el accionar de la entidad demandada lo obligó a continuar cotizando, por lo que para efectos del cálculo del monto de aquella, no se deben tener en cuenta los aportes que realizó con posterioridad.



Prestación que se calcula en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es promediando los salarios base de cotización de toda la vida y de los últimos 10 años, siendo en este caso más favorable este último, por valor de \$1'193.579, al que se le aplica una tasa de reemplazo del 66.07%<sup>1</sup> dando lugar a una mesada inicial por valor de \$788.598, que se reconoce a razón de 13 mesadas anuales, atendiendo a los límites establecidos por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Calculado el retroactivo pensional causado entre el 10 de noviembre de 2015 y el 31 de agosto de 2020, asciende a **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$ 56'782.523)** monto del cual se autoriza a Colpensiones afectar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

Año	Variación IPC	valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2015	6,77%	\$ 788.598	1 + 40 días	\$ 1'840.062
2016	5,75%	\$ 841.986	13	\$ 10.945.819
2017	4,09%	\$ 890.400	13	\$ 11.575.204
2018	3,18%	\$ 926.818	13	\$ 12.048.630
2019	3,80%	\$ 956.290	13	\$ 12.431.776
2020		\$ 992.629	8	\$ 7.941.032
TOTAL				\$ 56'782.523

<sup>1</sup> Artículo 34 Ley 100 de 1993. “El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$ , donde:

$r$  = porcentaje del ingreso de liquidación.

$s$  = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

$s: \frac{\$1'193.579}{\$644.350} = 1.852$

$r: 65.5 - (0.5 \times 1.852)$

$r: 65.5 - (0.926)$

$r: 64.57$

semanas adicionales a las mínimas requeridas: 75 que permite aumentar 1.5%

total: 66.07%

Suma que no se encuentra afectada por la prescriptiva, en tanto entre la fecha de exigibilidad y la presentación de la acción judicial, no ha transcurrido un término superior a 3 años.

A partir del 1° de septiembre de 2020, la accionada continuará pagando la mesada pensional por valor de \$992.629, a razón de 13 mesadas anuales.

Por último, respecto a los intereses de mora, a los mismos se condenará la accionada, en tanto la negación del derecho pensional se produjo por causas imputables a la accionada, debido a la falta de actualización de los reportes de cotizaciones del actor, en tanto el subrogatorio del empleador Industrial Hullera pagó los aportes ordinarios y especiales del extinto empleador, aunado a que al momento en que se solicitó el reconocimiento pensional se hallaban satisfechos los requisitos de causación del derecho pensional. Intereses que serán reconocidos desde el 25 de noviembre de 2015, (4 meses luego de presentada la reclamación del derecho pensional- fl. 10) y que cesarán una vez se reconozca la obligación pensional acá declarada.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos de apelación y de consulta.

Costas en primera instancia como dispuso el A quo. Sin costas en esta instancia toda vez que no salieron adelante de forma total ninguna de las réplicas de las partes.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de decisión laboral **MODIFICA EL NUMERAL TERCERO** de la sentencia en el entendido que el disfrute de la pensión especial de vejez data del 10 de noviembre de 2015. Calculado el retroactivo pensional entre tal fecha y el 31 de agosto de 2020, a razón de 13 mesadas anuales asciende a **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$ 56´782.523)** suma que se pagará con la debida indexación y de la cual se autoriza a Colpensiones a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

A partir del 1° de septiembre de 2020 la accionada continuará pagando la mesada pensional por valor de \$992.629, a razón de 13 mesadas anuales.

Se adiciona la sentencia en el sentido de condenar al reconocimiento de los intereses de mora, los que comienzan su cómputo desde el 25 de noviembre de 2015 y que cesarán una vez se satisfaga la obligación acá declarada.

En lo demás se confirma la sentencia recurrida y revisada en consulta.

Costas en primera instancia como dispuso el A quo. Sin costas en esta instancia toda vez que no prosperaron de forma total las réplicas de las partes.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

  
**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

  
**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín a las 8 a.m. Medellín, septiembre **24 de 2020**